

Victoria, Tamaulipas, a veinte de septiembre del dos mil veintitrés.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/1970/2022/AI, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el recurrente, generado respecto de la solicitud de información con número de folio 280524022000074, presentada ante el Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Solicitud de información. El cuatro de octubre del dos mil veintidós, el particular realizó una solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, la cual fue identificada con el número de folio 280524022000074, en la que requirió se le informara:

"...1.- El número de denuncias atendidas en materia de protección animal en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2021, a la fecha de contestación del presente, solicitando se explique pormenorizadamente las etapas procesales en que se encuentra cada expediente, informando a cuantas personas se han sancionado derivado de los mismos. 2.-El presupuesto otorgado en el presupuesto para el ejercicio 2022 para campañas de esterilización de animales en situación de calle, señalando el monto devengado en el último año, solicitando se expongan pormenorizadamente los conceptos que integran los gastos erogados, exhibiendo copia de las facturas expedidas con dicho motivo. As 3.- De qué manera el Presidente Municipal Ing. Armando Martínez Manríquez, ha dado cumplimiento a las obligaciones que tiene en función del marco jurídico expuesto líneas arriba. 4.- Informe a cuánto asciende la recaudación por imposición de multas en materia de protección animal, en las diferentes conductas sancionadas por el marco jurídico de la materia. 4.- El organigrama de la Unidad Administrativa de Protección Animal, en caso de existir, señalando las funciones que desempeña cada integrante, anexando curriculum vitae. En caso de no funcionar la Unidad Administrativa en referencia, solicito se informe el motivo de esta omisión. 5.- Informe a cuánto asciende el presupuesto destinado en el Gobierno Municipal de Altamira, para la Unidad Administrativa de Protección Animal. 6.- Se solicita copia del Programa Anual de Protección Animal al que están obligados en términos de los preceptos legales en cita, informando el avance en su ejecución. 7.- Informe el número de esterilizaciones realizadas por la presente administración. 8.- Se solicita rinda informe del avance, evidencia presupuestal o cualquier dato relacionado con el Hospital Veterinario

Municipal, anunciado públicamente por el Alcalde Armando Martínez Manríquez, señalando la fecha en que se estima prestará servicio...."

SEGUNDO. Respuesta. En fecha primero de noviembre del dos mil veintidós, la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, emitió una respuesta mediante la Plataforma Nacional de Transparencia allegando diversos documentos, donde menciona que se confirmó por el Comité de Transparencia la clasificación de la información como reservada de los puntos 2, 4 y 5, quedando asentada en el expediente CT/A-006/OCT-25-2022.

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El dieciséis de noviembre del dos mil veintidós, la particular interpuso recurso de revisión, manifestando como agravios lo siguiente:

"...Según la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena que todo acto de autoridad debe de estar fundado y motivado, sin embargo la supuesta respuesta que envían las Autoridades del Municipio de Altamira a la solicitud de información hecha, quienes claramente son omisas en manifestare porque razón los datos que solicitamos se encuentran como reservados, fundándose erróneamente en la Fracción V del Artículo 117, de la Ley de la materia..." (Sic).

CUARTO. Tramitación del recurso de revisión:

- a) Turno del recurso de revisión. En fecha diecisiete de noviembre del dos mil veintidós, se ordenó su ingreso estadístico, el cual le correspondió conocer a ésta ponencia para su análisis bajo la luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.
- b) Admisión del recurso de revisión. En fecha veintidós de noviembre del dos mil veintidós, se admitió a trámite el presente medio de impugnación, y se declaró abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días hábiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera.
- c) Notificación al sujeto obligado y particular. En fecha veintinueve de noviembre del dos mil veintidós, ambas

partes fueron notificadas de la apertura del periodo de alegatos a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, lo que obra a fojas 16 y 17.

- d) **Alegatos.** En fecha ocho de diciembre del dos mil veintidós, el sujeto obligado emitió sus alegatos a través del correo oficial de este Instituto, encontrándose dando respuesta a los requerimientos realizados por el solicitante, sin embargo en lo que respecta a los puntos 2, 4 y 5, reitera su respuesta inicial proporcionando el acta de reserva emitida por el Comité de Transparencia.
- e) **Cierre de Instrucción.** Consecuentemente el trece de diciembre del dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 168, fracciones V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la elaboración de la presente resolución.

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor procede a emitir la resolución en cuestión bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia, de Acceso a la información y de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6º, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los artículos 42 fracción II, 150 fracciones I, II y VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 17 fracción V de la Constitución

Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 168 fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación, con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Común ; Tesis: I.7o.P.13 K; Página: 1947; que a la letra dice:

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." (Sic)

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales

de improcedencia y sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de orden público.

- a) **Causales de Improcedencia.** Por cuestión de método, previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia.

Par tal efecto, se cita el contenido del artículo 173 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, que contiene las hipótesis de improcedencia siguientes:

"Artículo 173.

El recurso será desechado por improcedente cuando:

- I.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 158 de la presente Ley;*
- II.- Se esté tramitando, ante el Poder Judicial, algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente;*
- III.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 159 de la presente Ley;*
- IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 161 de la presente Ley;*
- V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;*
- VI.- Se trate de una consulta; o*
- VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos." (Sic)*

De tal forma, a continuación, se analizará cada una de las hipótesis que prevé el precepto referido:

I. Oportunidad

El recurso de revisión que nos ocupa fue presentado en tiempo y forma, dentro del plazo de 15 días, establecido en el artículo 158 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

II. Litispendencia

Por otra parte, este Instituto no tiene conocimiento de la existencia de algún recurso o medio de defensa en trámite ante los tribunales del Poder Judicial Federal presentado por la

persona recurrente, razón por la cual la hipótesis prevista en la fracción II del precepto legal en cuestión no cobra vigencia.

III. Acto controvertido

De las manifestaciones vertidas por la persona recurrente, se advierte que la controversia en el presente medio de impugnación consiste en la clasificación de la información por lo que se actualiza la causal de procedencia del recurso de revisión, prevista en el artículo 159, fracción I de la Ley local de la materia.

IV. Prevención

Asimismo, es de señalar que, dado que el recurso de revisión interpuesto por la persona recurrente cumplió con los requisitos previstos en el artículo 160 del mismo ordenamiento, no fue necesario prevenir en el presente asunto.

V. Veracidad

Ahora bien, de las manifestaciones realizadas por la persona recurrente en su recurso de revisión, no se desprende que haya impugnado la veracidad de la información proporcionada por el sujeto obligado, por lo que no se actualiza la hipótesis de improcedencia establecida en la fracción V del artículo 173 en análisis.

VI. Consulta

Asimismo, de la revisión al recurso de revisión interpuesto por la persona recurrente, no se considera que la pretensión estribe en una consulta, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo en cuestión.

VII. Ampliación

Finalmente, del contraste de la solicitud de información de la persona recurrente con el recurso de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, este Instituto no advierte que la persona



recurrente haya ampliado los términos de su solicitud de acceso original.

- b) Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento.

Dicho lo anterior, es importante citar el artículo 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se prevé:

ARTÍCULO 174.

El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice alguno de los siguientes supuestos:

I.- El recurrente se desista;

II.- El recurrente fallezca;

III.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia; y

*IV.- Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del presente Capítulo.”
(Sic)*

Conforme al estudio realizado a las constancias que obran en el expediente, no se desprende que el recurrente se haya desistido del recurso, haya fallecido, o que sobreviniera alguna causal de improcedencia.

De lo anterior y señalando el recurrente como agravio la clasificación de la información, es importante analizar la suplencia de la queja en el presente recurso, la cual está contenida en el artículo 163 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado y que a continuación se cita:

ARTÍCULO 163.

Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente, sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose de que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden y motiven sus pretensiones.”(Sic)

De lo citado, comprendemos que el Órgano Garante debe analizar todo aquel agravio que afecta al particular deducido los motivo de los hechos narrados por este, en cualquier momento del procedimiento, aún y cuando este no lo mencione expresamente.

Por esta razón y en suplencia de la queja de acuerdo al artículo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadra dentro de la hipótesis estipulada en el artículo 159, numeral 1, fracción I, de la norma antes referida, que a la letra estipula lo siguiente:

"ARTÍCULO 159.

1. El recurso de revisión procederá en contra de:

...

1.- La clasificación de la información..." (Sic, énfasis propio)

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las constancias y documentos que obran en el expediente, se advierte que la presente resolución debe resolver sobre la clasificación de la información.

CUARTO. Estudio del asunto. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se procede al análisis de la solicitud de información que reclamo el recurrente al sujeto obligado y las manifestaciones realizadas por el particular en su escrito de recurso.

a) Solicitud de Información. Al efecto en el caso concreto tenemos que el particular requirió al sujeto obligado lo siguiente:

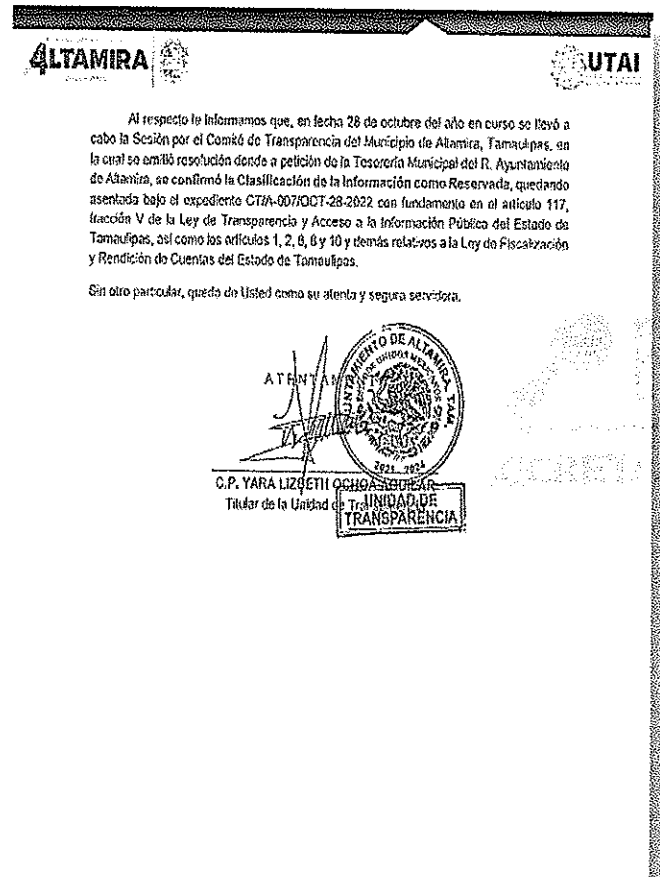
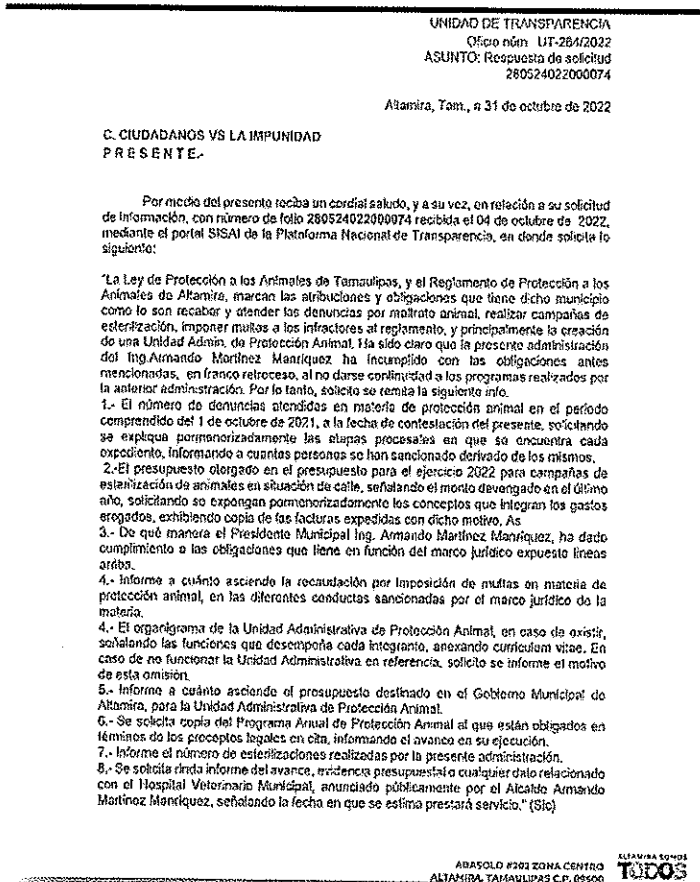
"...1.- El número de denuncias atendidas en materia de protección animal en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2021, a la fecha de contestación del presente, solicitando se explique pormenorizadamente las etapas procesales en que se encuentra cada expediente, informando a cuantas personas se han sancionado derivado de los mismos. 2.-El presupuesto otorgado en el presupuesto para el ejercicio 2022 para campañas de esterilización de animales en situación de calle, señalando el monto devengado en el último año, solicitando se expongan pormenorizadamente los conceptos que integran los gastos erogados,

exhibiendo copia de las facturas expedidas con dicho motivo. As 3.- De qué manera el Presidente Municipal Ing. Armando Martínez Manríquez, ha dado cumplimiento a las obligaciones que tiene en función del marco jurídico expuesto líneas arriba. 4.- Informe a cuánto asciende la recaudación por imposición de multas en materia de protección animal, en las diferentes conductas sancionadas por el marco jurídico de la materia. 4.- El organigrama de la Unidad Administrativa de Protección Animal, en caso de existir, señalando las funciones que desempeña cada integrante, anexando curriculum vitae. En caso de no funcionar la Unidad Administrativa en referencia, solicito se informe el motivo de esta omisión. 5.- Informe a cuánto asciende el presupuesto destinado en el Gobierno Municipal de Altamira, para la Unidad Administrativa de Protección Animal. 6.- Se solicita copia del Programa Anual de Protección Animal al que están obligados en términos de los preceptos legales en cita, informando el avance en su ejecución. 7.- Informe el número de esterilizaciones realizadas por la presente administración. 8.- Se solicita rinda informe del avance, evidencia presupuestal o cualquier dato relacionado con el Hospital Veterinario Municipal, anunciado públicamente por el Alcalde Armando Martínez Manríquez, señalando la fecha en que se estima prestará servicio..." (Sic)

b) Respuesta emitida por el Sujeto Obligado. En atención a lo solicitado, el sujeto obligado allego diversos documentos, de los cuales resalta el oficio con numero UT-264/2022, en el cual manifiesta que el día 28 de octubre del dos mil veintidós se llevó a cabo Sesión por el Comité de Transparencia, en la cual se emitió resolución, donde a petición la Tesorería Municipal solicito se confirmara la clasificación de la información como reservada en relación a los puntos 2.- El presupuesto otorgado en el presupuesto para el ejercicio 2022 para campañas de esterilización de animales en situación de calle, señalando el monto devengado en el último año, solicitando se expongan pormenorizadamente los conceptos que integran los gastos erogados, exhibiendo copia de las facturas expedidas con dicho motivo, 4.- Informe a cuánto asciende la recaudación por imposición de multas en materia de protección animal, en las diferentes conductas sancionadas por el marco jurídico de la materia, y 5.- Informe a cuánto asciende el

presupuesto destinado en el Gobierno Municipal de Altamira, para la Unidad Administrativa de Protección Animal, quedando asentada en el expediente CT/A-007/OCT-28-2022, sin embargo, la titular de la unidad de Transparencia, mediante oficio con número UT-264-2022, le dio respuesta al solicitante indicando que toda la información había sido clasificada como reservada.

c) Valor Probatorio. El sujeto obligado aportó como elementos de prueba de su intención, los siguientes:



Instrumentales a las que se les concede valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los dispositivos legales Capítulo XI, artículo 397 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, aplicado supletoriamente a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, por así disponerle ésta última en su numeral 195, en virtud de que son documentos base del presente procedimiento.

d) **Agravio.** Inconforme con la respuesta emitida por el sujeto obligado, el particular acudió mediante Plataforma Nacional De Transparencia, invocando como agravio la clasificación de la información.

e) **Alegatos.** Posteriormente después de ser admitido el recurso de revisión, se les notifico a las partes para que procedieran a manifestar sus alegatos, a lo que el sujeto obligado en fecha ocho de diciembre del dos mil veintidós, mediante el correo electrónico de este órgano garante, presento sus alegatos, allegando diversos oficios de los cuales resaltan los siguientes:

- Oficio con numero UT-339/2022, expedido por la titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tampico, dirigido a este Órgano Garante, en el cual manifiesta que turno la solicitud a las áreas competentes para que estas dieran respuesta a los requerimientos del solicitante.
- Oficio con número ALT-DEMA-0503-2022, expedido por el Director de Ecología y Medio Ambiente, dirigido a la Titular de la Unidad de Transparencia, manifiesta que mediante oficio con número UT-317/2022, diera respuesta a los requerimientos 1, 3, 6, 7 y 8 de la solicitud de información con folio 280524022000074, a lo que procedió entregando la información siguiente:

Requerimiento 1.- El número de denuncias atendidas en materia de protección animal en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2021, a la fecha de contestación del presente, solicitando se explique pormenorizadamente las etapas procesales en que se encuentra cada expediente, informando a cuantas personas se han sancionado derivado de los mismos.

Respuesta.- EL número de denuncias presentadas ante la Dirección de Ecología y medio ambientes hasta esta fecha es de 88 presentadas.

Requerimiento 3.- De qué manera el Presidente Municipal Ing. Armando Martínez Manríquez, ha dado cumplimiento a las obligaciones que tiene en función del marco jurídico expuesto líneas arriba.

Respuesta.- La observancia a dicha regulación se otorga mediante la implementación objetivos, programas y líneas de acción para proteger la flora y la fauna que realiza la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, contenidas dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 del Municipio de Altamira.

Requerimiento 6.-Se solicita copia del Programa Anual de Protección Animal al que están obligados en términos de los preceptos legales en cita, informando el avance en su ejecución.

Respuesta.- El programa se encuentra contenido en el objetivo 7 del Eje 3 de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 del Municipio de Altamira, el cual contiene las estrategias y líneas de acción para proteger la flora y la fauna del territorio altamirense, y puede ser consultado a través del siguiente hipervínculo: https://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/cxlvii-Ext. No_3-290122 F-EV.pdf.

Una vez mostrado, la información la encontrará en las páginas 44 y 45 de dicho documento.

Requerimiento 7.- Informe el número de esterilizaciones realizadas por la presente administración.

Respuesta.- El número de Esterilizaciones realizadas por la presente administración es de 18.

Requerimiento 8.- Se solicita rinda informe del avance, evidencia presupuestal o cualquier dato relacionado con el Hospital Veterinario Municipal, anunciado públicamente por el Alcalde Armando Martínez Manríquez, señalando la fecha en que se estima prestará servicio.

Respuesta.- Respecto a la información requerida sobre el "Hospital Veterinario Municipal", hacemos de su conocimiento que proyecto que nos refiere no ha sido mencionado en ningún momento por el Alcalde, el Maestro Armando Martínez Manríquez, únicamente se ha referido a un Proyecto de Clínica Veterinaria, mismo que se encuentra sometido a aprobación dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Municipio de Altamira, Tamaulipas para el Ejercicio Fiscal 2023, por lo cual aún no se cuenta con información relativa a dicha obra.

- Oficio con número ALT/DA/2707/2022, expedido por la Directora de Administración del Ayuntamiento de Altamira, medio por el cual manifiesta que mediante oficio UT-319/2022, se le solicito diera respuesta al requerimiento 4 de la solicitud de información con número de folio 280524022000074, dando como respuesta lo siguiente:

Requerimiento 4.- El organigrama de la Unidad Administrativa de Protección Animal, en caso de existir, señalando las funciones que desempeña cada integrante, anexando curriculum vitae. En caso de no funcionar la Unidad Administrativa en referencia, solicito se informe el motivo de esta omisión.

Respuesta.- La unidad Administrativa de Protección Animal que refiere, no está operando en la actualidad debido a que no se encuentra considerada en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente al año 2022.

- Oficio con número TES-2022/000476, expedido por el Tesorero Municipal, medio por el cual manifiesta que mediante oficio UT-320/2022 se le requirió diera respuesta al punto 2 de la solicitud de información con número de folio 280524022000074, a lo que su respuesta fue lo siguiente:

Requerimiento 2.-El presupuesto otorgado en el presupuesto para el ejercicio 2022 para campañas de esterilización de animales en

situación de calle, señalando el monto devengado en el último año, solicitando se expongan pormenorizadamente los conceptos que integran los gastos erogados, exhibiendo copia de las facturas expedidas con dicho motivo.

Respuesta.- Es dable sería lar por esta Tesorería Municipal, que lo solicitado versa en información referente a la Cuenta Pública del presente Sujeto Obligado, por lo cual se solicitó por medio de oficio TES-2022/000395 la intervención del Comité de Transparencia Municipal para ser sometida a su consideración, análisis y a su vez la Clasificación de la Reserva de dicha información; en base a ello dicho Comité notifico a esta Tesorería mediante oficio ALT/CTM/052/2022 de la Sesión llevada a cabo en fecha 28 de octubre del 2022, de la cual se derivó el acta CT/A-007/OCT-28-2022 en donde se Clasificó la Información como Reservada.

Requerimiento 5.- Informe a cuánto asciende el presupuesto destinado en el Gobierno Municipal de Altamira, para la Unidad Administrativa de Protección Animal.

Respuesta.- Ahora bien, en cuanto al punto 5, la correspondiente partida presupuestal es asignada a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, sin ser segmentada en unidades administrativas específicas; la cual en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, se encarga de ejecutar, dentro del universo de sus actividades, acciones relativas en cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo.

De lo anterior, la Tesorería Municipal, anexo diversos documentos en los que se encuentra los cortes mensuales entregados a la Auditoría Superior del Estado, así como el Acta de sesión realizada por el Comité de Transparencia y la Resolución del Comité, en la cual se confirma la clasificación de información como reservada.

Expuestas las posturas de las partes, este órgano garante procede al análisis de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión.

Con base a los antecedentes expuestos y de las constancias que obran en autos, se determina REVOCAR parcialmente la respuesta del Sujeto Obligado, lo anterior, en virtud de las siguientes consideraciones.

En primera instancia es imprescindible establecer lo que la regulación establece respecto al derecho de acceso a la información, por ello, en primer lugar, vamos a revisar lo que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

"ARTÍCULO 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

...

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos..." (Sic)

Del precepto constitucional invocado, se desprende que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole

por cualquier medio de expresión; este derecho será garantizado por el Estado.

Asimismo, para el ejercicio del derecho de acceso a la información, se considerará que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.

De esta forma, en la interpretación del derecho de acceso a la información deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, por consiguiente, toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública.

Por su parte la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece:

"Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley.

Artículo 12. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, así como demás normas aplicables.

Artículo 13. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona.

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.

Artículo 18. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

Artículo 19. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados.

En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia.

Artículo 129. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos..." (Sic y énfasis propio)

En concatenación con lo anterior, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas establece:

"ARTÍCULO 4.

1. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.

2. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley.

ARTÍCULO 9.

El Organismo garante regirá su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:

- I.- Certeza (...);*
- II.- Eficacia (...);*
- III.- Imparcialidad (...);*
- IV.- Independencia (...);*
- V.- Legalidad (...);*
- VI.- Máxima Publicidad (...);*
- VII.- Objetividad (...);*
- VIII.- Profesionalismo (...); y*
- IX.- Transparencia (...).*

ARTÍCULO 12.

1. *Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas aplicables.*

2. *Se garantizará que dicha información:*

1.- *Sea veraz, completa, oportuna, accesible, confiable, verificable y en lenguaje sencillo;*

ARTÍCULO 17.

Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

ARTÍCULO 18.

1. *Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados.*

2. *En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia.*

ARTÍCULO 38.

Compete al Comité de Transparencia:

...

IV.- *Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los Sujetos Obligados*

ARTÍCULO 143.

1. *Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, en el formato en que el solicitante opte, de entre aquellos con que se cuenta, atendiendo a la naturaleza y ubicación de la información..." (Sic y énfasis propio)*

ARTÍCULO 145.

La Unidad de Transparencia deberá garantizar que las solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.

Con respecto a los artículos citados se desprende que toda la información que es generada, en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona, misma que además debe ser veraz, completa, oportuna, accesible verificable, entre otros; aunado a

que, los sujetos obligados tienen el deber de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

Del mismo modo, que la información es susceptible de existir si se encuentra dentro de las facultades competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos otorgan a los sujetos obligados, asimismo en caso de no haberse ejercido o no sea posible proporcionar la información, se deberá motivar la respuesta en función de las causas que motiven la clasificación de información, la inexistencia o en su caso la declaración de incompetencia y será el Comité de Transparencia quien confirme, modifique o revoque las determinaciones que realicen los Titulares de las Unidades de Transparencia.

Para cumplir con los principios y medidas que deben regir el actuar de los sujetos obligados para hacer valer el derecho a saber., se debe tomar en cuenta que toda la información que se encuentre en los archivos del sujeto obligado, ya sea porque, en atención a sus atribuciones, fue generada por el mismo, obtenida, adquirida, transformada o por cualquier circunstancia la posee, siempre será pública a menos que se encuentre contemplada dentro de las hipótesis que limitan el derecho de acceso a la información, que se refieren a la clasificación en sus dos vertientes, ya sea por reserva o confidencial, lo cual deberá encontrarse debidamente fundado y motivado dentro del acta que el Comité de Transparencia genere.

Sin embargo, en caso de no existir las evidencias que demuestren el desarrollo del procedimiento establecido en la reglamentación en comento, no puede entonces tenerse la certeza de que la respuesta recibida se sustente en archivos existentes, resguardados por las áreas competentes para su elaboración o administración, de acuerdo a sus funciones y competencias.

En ese tenor, tenemos que el sujeto obligado en primera instancia se limitó a responder que la información se encontraba clasificada como reservada, realizándolo de manera general a todo lo

requerido por el solicitante, por dicha razón la parte recurrente procedió a interponer el recurso de revisión que ahora nos ocupa, manifestando como agravio la clasificación de información, admitido el recurso de revisión, posteriormente se le hizo del conocimiento a las partes que se encontraba abierto el periodo de alegatos para que estos expusieran sus razones, a lo que el sujeto obligado dio parte de ellos, los cuales fueron descritos con anterioridad.

Por lo que esta ponencia procedió al estudio de los alegatos vertidos por la autoridad requerida, obteniendo como resultado lo siguiente:

En cuanto al requerimiento 1, el sujeto obligado solo dio como respuesta el número de denuncias, sin realizar manifestación alguna respecto a "en que etapas procesales se encontraba cada expediente correspondiente a dichas denuncias y el número de personas sancionadas derivados de los mismos".

Requerimiento 6, la autoridad requerida a través del área competente, dio como respuesta la liga electrónica https://po.tamaulipas.gob.mx/mx/wp-content/uploads/2022/01/cxlvii-Ext.No_3-290122F-EV.pdf, al realizar la verificación de esta, nos encontramos que nos dirige al Periódico Oficial del Estado, nos dirigimos a las páginas 44 y 45, en las cuales el sujeto obligado señala se encuentra dicho Programa, siendo esto cierto, ya que si se pudo localizar el Programa de Protección Animal, sin embargo el solicitante también requirió dentro del mismo punto, se le informara del avance de este, a lo que el área correspondiente fue omisa de atender.

Aunado a lo anterior, para esta ponencia es importante citar el criterio SO/002/2017, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, que a la letra dice:

Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta

proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información.

Precedentes:

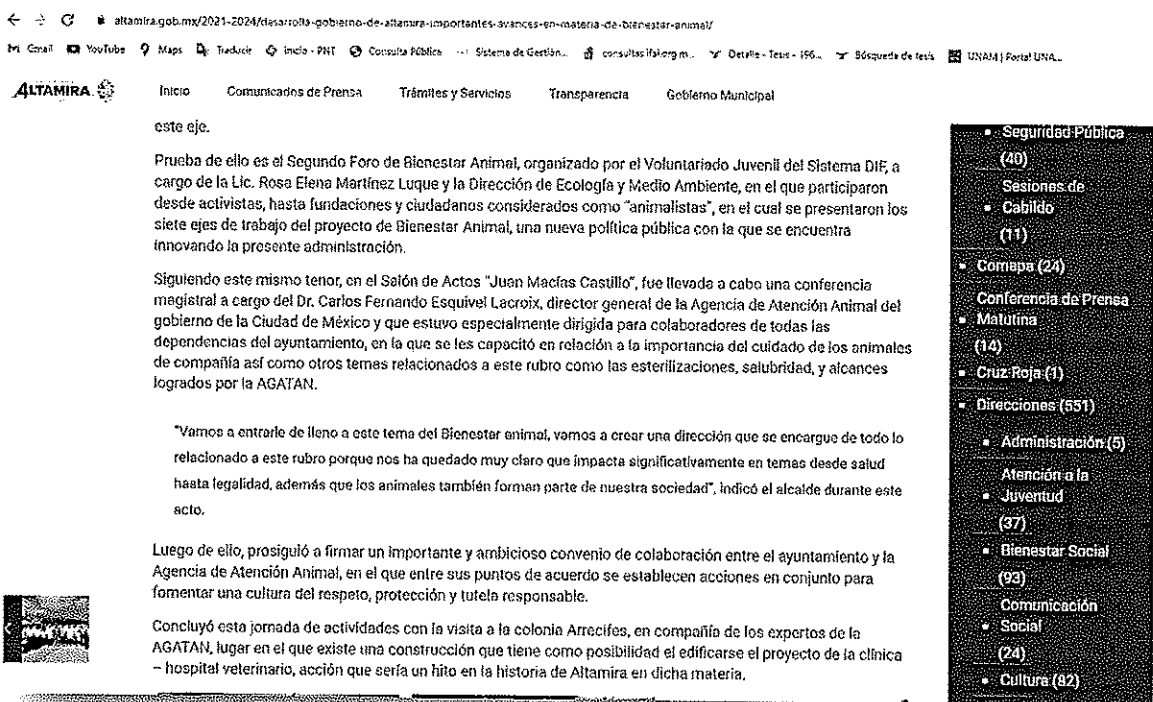
- Acceso a la información pública. RRA 0003/16. Sesión del 29 de junio de 2016. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Comisión Nacional de las Zonas Áridas. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.
- Acceso a la información pública. RRA 0100/16. Sesión del 13 de julio de 2016. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana.
- Acceso a la información pública. RRA 1419/16. Sesión del 14 de septiembre de 2016. Votación por unanimidad. Sin votos disidentes o particulares. Secretaría de Educación Pública. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

En el criterio antes mencionado se hace notar que la congruencia y la exhaustividad son principios de importancia, los cuales garantizan el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, en el cuales implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado y que esta cubra de manera completa lo requerido, a lo que como se puede apreciar en la información descrita en párrafos anteriores, el sujeto obligado no cumplió con estos principios, al solo cubrir de manera parcial lo requerido, por lo cual se estima que dio una respuesta incompleta a lo solicitado.

En cuanto a lo requerido en los puntos 3, 7 y 8, ya descritas con anterioridad, se tiene que el área competente dio cabal cumplimiento a lo requerido, ya que expreso de qué manera se da cumplimiento a las obligaciones en materia de protección animal, señalando que estas se realizan mediante la implementación de objetivos, programas y líneas de acción para proteger a la flora y fauna, así como que el número de esterilizaciones realizadas en la presente administración es de 18, en

cuanto a datos como avance y evidencia presupuestal relacionados con el Hospital Veterinario Municipal, se menciona que este solo es un Proyecto, mismo que se encuentra sometido a aprobación para el Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2023, por lo cual aún no se cuenta con dicha información.

Esta ponencia se dio a la tarea de realizar una búsqueda dentro de las páginas oficiales del Ayuntamiento de Altamira, en relación al Hospital Veterinario, encontrando dentro de su página oficial en el apartado de Comunicados de Prensa, lo siguiente:



The screenshot shows the website of the Ayuntamiento de Altamira. The main content area displays a news article with the following text:

este eje.

Prueba de ello es el Segundo Foro de Bienestar Animal, organizado por el Voluntariado Juvenil del Sistema DIF, a cargo de la Lic. Rosa Elena Martínez Luque y la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, en el que participaron desde activistas, hasta fundaciones y ciudadanos considerados como "animalistas", en el cual se presentaron los siete ejes de trabajo del proyecto de Bienestar Animal, una nueva política pública con la que se encuentra innovando la presente administración.

Siguiendo este mismo tenor, en el Salón de Actos "Juan Macías Castillo", fue llevada a cabo una conferencia magistral a cargo del Dr. Carlos Fernando Esquivel Lacroix, director general de la Agencia de Atención Animal del gobierno de la Ciudad de México y que estuvo especialmente dirigida para colaboradores de todas las dependencias del ayuntamiento, en la que se les capacitó en relación a la importancia del cuidado de los animales de compañía así como otros temas relacionados a este rubro como las esterilizaciones, salubridad, y alcances logrados por la AGATAN.

"Vamos a entrarle de lleno a este tema del Bienestar animal, vamos a crear una dirección que se encargue de todo lo relacionado a este rubro porque nos ha quedado muy claro que impacta significativamente en temas desde salud hasta legalidad, además que los animales también forman parte de nuestra sociedad", indicó el alcalde durante este acto.

Luego de ello, prosiguió a firmar un importante y ambicioso convenio de colaboración entre el ayuntamiento y la Agencia de Atención Animal, en el que entre sus puntos de acuerdo se establecen acciones en conjunto para fomentar una cultura del respeto, protección y tutela responsable.

Concluyó esta jornada de actividades con la visita a la colonia Arrecifes, en compañía de los expertos de la AGATAN, lugar en el que existe una construcción que tiene como posibilidad el edificarse el proyecto de la clínica - hospital veterinario, acción que será un hito en la historia de Altamira en dicha materia.

The sidebar menu on the right includes the following items:

- Seguridad Pública (49)
- Sesiones de Cabildo (11)
- Comapa (24)
- Conferencia de Prensa Matutina (14)
- Cruz Roja (1)
- Direcciones (551)
 - Administración (5)
 - Atención a la Juventud (37)
 - Bienestar Social (93)
 - Comunicación Social (24)
 - Cultura (82)

Por tanto se tiene que en relación al Hospital Veterinario, este aún se encuentra en etapa de proyecto.

Toda la información anterior fue proporcionada por el área de Dirección de Ecología y Medio Ambiente, siendo esta la competente para conocer, generar y resguardar dicha información, con base en lo establecido en el artículo 116 del Reglamento de Protección a los Animales para el Municipio de Altamira, Tamaulipas.

Ahora bien, en la solicitud de información que nos ocupa, se puede percibir que existe un error al momento de numerar los puntos, esto a que existen 2 requerimientos con el mismo número, las cuales se encuentra con el numeral 4, si bien, se identifican con el mismo

número, los dos requerimientos solicitan cosas distintas, siendo el primero "Informe a cuanto asciende la recaudación por imposición de multas en materia de protección animal, en las diferentes conductas sancionadas por el marco jurídico de la materia" y el segundo " El organigrama de la Unidad Administrativa de Protección Animal, en caso de existir, señalando las funciones que desempeñan cada integrante, anexando curriculum vitae. En caso de no funcionar la Unidad Administrativa, solicito se informe el motivo de esta omisión"

Como obra en este expediente, se tiene que en una respuesta inicial la información se clasifico de manera general, sin embargo en el periodo de alegatos el sujeto obligado cambio su actuar, procediendo a brindar información de cada punto, en este caso en relación al punto 4 "El organigrama de la Unidad Administrativa de Protección Animal, en caso de existir, señalando las funciones que desempeñan cada integrante, anexando curriculum vitae. En caso de no funcionar la Unidad Administrativa, solicito se informe el motivo de esta omisión" la Titular de transparencia, mediante oficio UT-319/2022, le solicito a la Directora de Administración del Ayuntamiento de Altamira, diera respuesta a este requerimiento, a lo que en obediencia de lo solicitado, esta Dirección manifestó que "La unidad de administración de protección animal, no está operando en la actualidad debido a que no se encuentra considerada en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2022"

De lo anterior, esta ponencia se pudo percatar, que la Dirección Administrativa no es la autoridad competente para solventar dicho requerimiento, toda vez que de acuerdo a lo establecido en el artículo 116 y 117 del Reglamento de Protección a los Animales para el Municipio de Altamira, Tamaulipas, la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, funge como la Unidad Administrativa de Protección Animal, para dar mayor certeza de lo antes descrito es preciso citar el articulo antes mencionado, que a la letra dice:

CAPÍTULO XIX

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PROTECCIÓN ANIMAL

Artículo 116.- La Dirección de Ecología y Medio Ambiente, será la unidad administrativa responsable para atender todo lo relativo a la aplicación del presente Reglamento, la recepción de denuncias ciudadanas, el aseguramiento de animales en situación de riesgo o maltrato, la inspección y vigilancia, el registro municipal de animales, el otorgamiento de las licencias y autorizaciones señaladas en el presente Reglamento y demás funciones no reservadas a otras autoridades. La unidad administrativa operará con una partida presupuestal que se apruebe anualmente por el R. Ayuntamiento.

Artículo 117.- La unidad administrativa, funcionará con el siguiente personal:

- I.- Coordinador General de la Unidad Administrativa;
- II.- Coordinador del Área de Recepción de Denuncias, Inspecciones y Verificaciones;
- III.- Coordinador del Área Jurídica y de Procedimientos Administrativos que se sigan por denuncias relacionadas con el presente Reglamento; IV.- Coordinador de Autorizaciones y Licencias en Materia de Protección Animal y del Registro Animal Municipal;
- V.- Coordinador de Educación y Concientización en materia de Protección Animal; VI.- Inspectores; y
- VII.- Auxiliares administrativos necesarios.

Las personas que ocupen los cargos señalados en las fracciones anteriores, deberán tener la experiencia profesional suficiente en su área y en específico, el conocimiento del presente Reglamento, la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tamaulipas, Ley Federal de Sanidad Animal y Normas Oficiales Mexicanas aplicables en el ramo de protección animal.

Por lo anterior, en atención a lo requerido, este Instituto advierte que se debió gestionar el requerimiento a la **Dirección de Ecología y Medio Ambiente** y no a la Dirección de Administración, por lo tanto esta ponencia propone **REVOCAR** la respuesta emitida a este requerimiento.

En cuanto al punto 4 "Informe a cuánto asciende la recaudación por imposición de multas en materia de protección animal, en las diferentes conductas sancionadas por el marco jurídico de la materia" en la etapa de alegatos, la autoridad no realizó manifestación alguna en relación a este, cuando en un hecho posterior manifestó que era información clasificada como reservada, por lo tanto se entiende que no realizó un cambio a su respuesta inicial en cuanto a este punto

petitorio, entendiendo así que no vertió argumento alguno en alegatos para fundar y motivar la clasificación de este.

Requerimiento 5, de acuerdo a sus facultades y atribuciones, la Tesorería Municipal, fue la encargada de dar respuesta a esta petición, a lo cual manifestó que “la correspondiente partida presupuestal es asignada a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, sin ser segmentada en unidades administrativas específicas; por tanto en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, se encarga de ejecutar, dentro del universo de sus actividades, en cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo”

De lo anterior, se bien, solo se limitó a manifestar que después de asignarse la partida presupuestal al área de Dirección de Ecología y Medio Ambiente, ya esta se encarga de dispersar dicho presupuesto con base en el Plan Municipal de Desarrollo, cuando claramente el solicitante requirió “a cuánto asciende el presupuesto destinado para la Unidad Administrativa” se percibe que tanto la Tesorería Municipal y la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, son áreas que de forma directa e indirecta tienen conocimiento de la información de acuerdo a sus atribuciones y funciones, por lo tanto se afirma que la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Altamira, fue omisa en turnar la solicitud a todas las áreas que pudieran contar con la información, con ella dejando al solicitante con respuesta e información incompleta.

Con ello pasando por alto lo establecido en el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

ARTÍCULO 145.

La Unidad de Transparencia deberá garantizar que las solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.

Del artículo anterior se desprende, que todas las solicitudes deberán turnarse a las áreas que pudieran contar con la información, con base en sus facultades, competencias y funciones, ya sea que tengan conocimiento de manera directa o indirecta de esta.

Requerimiento 2, la Autoridad requerida reitero su respuesta inicial, argumentando que dicha información se encontraba clasificada como reservada, al haberse realizado petición al Comité de Transparencia, dando como respuesta que se confirmaba como reservada, ya que esta forma parte de la cuenta pública la cual se encontraba en proceso de fiscalización por parte de la Auditoría Superior del Estado.

Con respecto al marco normativo relativo a la clasificación de la información como reservada se tiene que como ya se ha referido anteriormente que el derecho de acceso a la información puede verse limitado, pero estos límites no pueden aplicarse de manera arbitraria o discrecional, sino que se requiere que encuentre una justificación racional, en función del bien jurídico que tiende a protegerse y el menoscabo del derecho de las personas a acceder a la información pública.

De ahí que, se debe destacar que el procedimiento para llevar a cabo la clasificación de la información ya sea como reservada o confidencial, es una garantía a favor del solicitante de que efectivamente se realizaron las gestiones previstas en la Ley de la materia, para arribar a la conclusión, conforme a derecho, debidamente fundada y motivada, de que la información del interés del recurrente guarda ese carácter, siendo de la siguiente forma:

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en sus artículos 100, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111 y 112, dispone:

"Artículo 100.

La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla. Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la Ley Federal y de las Entidades Federativas.

Artículo 103.

En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño. Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.

Artículo 104. *En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:*

- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;*
- II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y*
- III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.*

Artículo 105. *Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar su procedencia.*

La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados.

Artículo 106. *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

- I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;*
- II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o*
- III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.*

Artículo 107. *Los Documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva.*

Artículo 109. *Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia de clasificación de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas, serán de observancia obligatoria para los sujetos obligados.*

Artículo 111. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.

Artículo 112. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en las versiones públicas

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

- I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;*
- II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;*
- III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;*
- IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal;*
- V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;*
- VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;*
- VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;*
- VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;*
- IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;*
- X. Afecte los derechos del debido proceso;*
- XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;*
- XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y*
- XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales..." (Sic)*

Asimismo la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tamaulipas, en su carácter de Ley secundaria en la materia, en los artículos, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 116, 117,

fracción V, 118 y 116, respecto a la información reservada, establece lo siguiente:

“Artículo 102.

- 1. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder se encuentra dentro de los supuestos de reserva o confidencialidad a que se refiere el presente Título.*
- 2. Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla.*
- 3. Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.*

ARTÍCULO 106.

En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.

ARTÍCULO 107.

- 1. Todo acuerdo de clasificación de la información, deberá señalar las razones, motivos o circunstancias que llevaron al sujeto obligado a elaborar dicho acuerdo, además justificar el plazo de reserva y, en su caso, de la ampliación del mismo.*
- 2. En todo caso, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar la prueba de daño.*
- 3. Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.*

ARTÍCULO 108.

En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:

- I.- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público;*
- II.- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y*
- III.- La limitación se ajusta al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.*

ARTÍCULO 109.

- 1. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar su procedencia.*
- 2. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva, corresponderá a los sujetos obligados.*

ARTÍCULO 110.

La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:

- I.- Se reciba una solicitud de acceso a la información;*
- II.- Se determine mediante resolución de autoridad competente; y*

III.- Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.

ARTÍCULO 112.

1. Los Sujetos Obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general que clasifiquen documentos o información como reservada.

2. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del documento y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada.

3. En ningún caso se podrán clasificar documentos antes de que se genere la información.

4. La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.

ARTÍCULO 113.

Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia de clasificación de la información reservada y confidencial, y para la elaboración de versiones públicas, serán de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados.

ARTÍCULO 116.

La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en las versiones públicas.

Artículo 117.

Podrá clasificarse como información reservada aquella cuya publicación:

I.- Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;

II.- Pueda entorpecer u obstaculizar las negociaciones y relaciones internacionales;

III.- Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;

IV.- Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

V.- Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;

VI.- Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

VII.- Contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, cual deberá estar documentada;

VIII.- Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;

IX.- Afecte el debido proceso;

X.- Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

XI.- Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; y

XII.- Las que por disposición expresa de una Ley tengan tal carácter y sean acordes con las bases, principios y disposiciones

establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.

ARTÍCULO 118.

Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título..." (Sic)

Por su parte los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, señalan en sus numerales lo siguiente:

"...Primero. Los presentes Lineamientos Generales tienen por objeto establecer los criterios con base en los cuales los sujetos obligados clasificarán como reservada o confidencial la información que posean, desclasificarán y generarán, en su caso, versiones públicas de expedientes o documentos que contengan partes o secciones clasificadas. El presente cuerpo normativo es de observancia obligatoria para los sujetos obligados.

Segundo. Para efectos de los presentes Lineamientos Generales, se entenderá por:

I. Áreas: Las instancias que cuentan o puedan contar con la información. Tratándose del sector público, serán aquellas que estén previstas en el reglamento interior, estatuto orgánico respectivo o equivalente y tratándose de las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, serán aquellas que sean integrantes de la estructura de los sujetos obligados a la que se le confieren atribuciones específicas en materia de transparencia y acceso a la información;

III. Comité de Transparencia: La instancia a la que hace referencia el artículo 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la referida en la Ley Federal y en las legislaciones locales, que tiene entre sus funciones las de confirmar, modificar o revocar las determinaciones en materia de clasificación de la información que realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados;

XIII. Prueba de daño: La argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados tendiente a acreditar que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la normativa aplicable y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla;

XIV. Prueba de interés público: La argumentación y fundamentación realizada por los organismos garantes cuando exista una colisión de derechos, mediante un ejercicio de ponderación, tendiente a acreditar si el beneficio de la entrega de información clasificada favorece al interés público o por el contrario debe privilegiarse la clasificación;

Cuarto. Para clasificar la información como reservada o confidencial, de manera total o parcial, el titular del área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley General, en relación con las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos, así como en aquellas disposiciones legales aplicables a la materia en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto en la Ley General. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia.

Quinto. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación previstos en la Ley General, la Ley Federal y leyes estatales, corresponderá a los sujetos obligados, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación de la información ante una solicitud de acceso o al momento en que generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, observando lo dispuesto en la Ley General y las demás disposiciones aplicables en la materia.

Séptimo. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:

- I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;*
- II. Se determine mediante resolución del Comité de Transparencia, el órgano garante competente, o en cumplimiento a una sentencia del Poder Judicial; o*
- III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, la Ley Federal y las correspondientes de las entidades federativas. Los titulares de las áreas deberán revisar la información requerida al momento de la recepción de una solicitud de acceso, para verificar, conforme a su naturaleza, si encuadra en una causal de reserva o de confidencialidad.*

Octavo. Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el Estado mexicano que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial.

Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.

En caso de referirse a información reservada, la motivación de la clasificación deberá comprender el análisis de la prueba de daño a que se hace referencia el artículo 104 de la ley General, en relación con el artículo trigésimo tercero de los presentes lineamientos, así como las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de reserva.

...

Vigésimo cuarto. De conformidad con el artículo 113, fracción VI de la Ley General, podrá considerarse como reservada, aquella información que obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, cuando se actualicen los siguientes elementos:

- I. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes;*
- II. Que el procedimiento se encuentre en trámite;*

III. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes, y

IV. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes.

Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente:

I. Se deberá fundar la clasificación, al citar la fracción y la hipótesis de la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada;

II. Se deberá motivar la clasificación, señalando las circunstancias de modo, tiempo y lugar que acrediten el vínculo entre la difusión de la información y la afectación al interés público o a la seguridad nacional;

III. Se deberán precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría un riesgo de perjuicio real, demostrable e identificable al interés jurídico tutelado de que se trate;

IV. Mediante una ponderación entre la medida restrictiva y el derecho de acceso a la información, deberán justificar y probar objetivamente mediante los elementos señalados en la fracción anterior, que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio que supera al interés público de que la información se difunda;

V. Deberán elegir y justificar la opción de excepción al derecho de acceso a la información que menos lo restrinja y que sea adecuada y proporcional para evitar el perjuicio al interés público, evitando siempre que sea posible la reserva absoluta de documentos o expedientes; y

VI. En los casos en que se determine la clasificación total de la información, se deberán especificar en la prueba de daño, con la mayor claridad y precisión posible, los aspectos relevantes de la información clasificada que ayuden a cumplir con el objetivo de brindar certeza al solicitante.

Trigésimo cuarto. El periodo máximo por el que podría reservarse la información será de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que por primera vez el Comité de Transparencia confirme la clasificación respectiva.

Los titulares de las áreas deberán determinar que el plazo de reserva sea el estrictamente necesario para proteger la información mientras subsistan las causas que dieron origen a la clasificación, salvaguardando el interés público protegido.

Asimismo, deberán señalar las razones por las cuales se estableció el plazo de reserva determinado, misma que deberán estar relacionadas y sustentadas en la prueba de daño.

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el plazo de reserva hasta por un periodo de cinco años adicionales, siempre y cuando se

justifique que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación.

...

DE LOS ELEMENTOS PARA LA CLASIFICACIÓN

Quincuagésimo. Los titulares de las áreas de los sujetos obligados podrán establecer sus propios modelos o formatos para la elaboración de versiones públicas de documentos o expedientes, siempre y cuando cumplan lo establecido en los presentes Lineamientos, así como en las correspondientes Leyes Generales.

Quincuagésimo primero. Toda acta del Comité de Transparencia deberá contener:

- I. El número de sesión y fecha;*
- II. El nombre del área que solicitó la clasificación de información;*
- III. La fundamentación legal y motivación correspondiente;*
- IV. La resolución o resoluciones aprobadas; y*
- V. La rúbrica o firma digital de cada integrante del Comité de Transparencia.*

Las resoluciones del Comité en las que se haya determinado confirmar o modificar la clasificación de información pública como reservada, deberán incluir, cuando menos:

- I. Los motivos y razonamientos que sustenten la confirmación o modificación de la prueba de daño;*
- II. Descripción de las partes o secciones reservadas, en caso de clasificación parcial;*
- III. El periodo por el que mantendrá su clasificación y fecha de expiración; y*
- IV. El nombre del titular y área encargada de realizar la versión pública del documento, en su caso.*

En los casos en que se clasifique la información como reservada siempre se entregará o anexará la prueba de daño con la respuesta al solicitante.

En los casos de resoluciones del Comité de Transparencia en las que se confirme la clasificación de información confidencial solo se deberán de identificar los tipos de datos protegidos, de conformidad con el lineamiento trigésimo octavo.

...

Quincuagésimo cuarto. Cuando el Comité de Transparencia confirme la clasificación de documentos reservados y/o confidenciales, sea total o parcialmente; se deberá anexar al expediente la resolución que determinó la clasificación o, en su defecto, identificar en la carátula del expediente del cual formen parte, la fecha y sesión del Comité de Transparencia en la que se confirmó dicha clasificación..." (Sic)

Sirve de sustento respecto de la prueba de daño la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación, con los siguientes datos: Decima Época; Registro: 2018460; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo III, Noviembre de 2018; Materia(s): Administrativa; Tesis: I.10o.A.79 A (10a.); Página: 2318; a la letra dice:

"...PRUEBA DE DAÑO EN LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SU VALIDEZ NO DEPENDE DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE EL SUJETO OBLIGADO APORTE. De acuerdo con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los lineamientos segundo, fracción XIII y trigésimo tercero, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, aprobados por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, la prueba de daño es la argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados para acreditar que la divulgación de la información lesiona un interés jurídicamente protegido y que el daño que puede producir es mayor que el interés de conocer ésta. Para tal efecto, disponen que en la clasificación de la información pública (como reservada o confidencial), debe justificarse que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; que ese riesgo supera el interés público general de que se difunda; y, que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Así, la prueba de daño establece líneas argumentativas mínimas que deben cursarse, a fin de constatar que la publicidad de la información solicitada no ocasionaría un daño a un interés jurídicamente protegido, ya sea de índole estatal o particular. Por tanto, al tratarse de un aspecto constreñido al ámbito argumentativo, la validez de la prueba de daño no depende de los medios de prueba que el sujeto obligado aporte, sino de la solidez del juicio de ponderación que se efectúe en los términos señalados..." (Sic)

Bajo estas condiciones y al analizar las actuaciones del expediente en su conjunto y de acuerdo a su literalidad, resulta evidente para este Órgano Garante que el sujeto obligado pasó por alto el contenido de los preceptos legales antes transcritos, sin realizar el procedimiento establecido en la Ley de la materia para la clasificación de la información, ya que intentó reservar la información que fue requerida mediante la solicitud de folio 280524022000074, lo cual fue confirmado por el Comité de Transparencia y se notificó a la ahora recurrente, sin acompañar los documentos que le dieran validez, sustentando ésta causal sin que se encuentren debidamente justificadas con la normatividad antes descrita.

De ahí que, se analizará la normativa en su conjunto referente a la materia, y que nos permite establecer que para que se actualice la causal de reserva de la información que invocó el Sujeto Obligado

relativa a lo dispuesto en el artículo 117, fracción V, de la Ley de la materia, deben de reunir los siguientes elementos:

- La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes.
- La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación de cumplimiento de las leyes.
- Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de verificación, inspección y auditoría que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes.
- Aquellas cuya difusión puedan obstruir o impedir el ejercicio de las facultades que llevan a cabo las autoridades competentes para recaudar, fiscalizar y comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en términos de las disposiciones normativas aplicables.

Por lo que hace a la fracción VI, del artículo 113, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, así como al artículo 117 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, en cumplimiento a lo dispuesto por el dispositivo Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, para que se actualice dicha causal deben de presentarse los siguientes:

- La existencia de un proceso de verificación del cumplimiento de las LEYES; del cual no se observa documento que acredite el supuesto;
- Que el procedimiento se encuentre en trámite;
- Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con las actividades que realiza la autoridad en el proceso de auditoría o verificación;
- Que con su difusión se pueda llegar a obstaculizar la actividad de auditoría o verificación que realicen las

autoridades en el procedimiento de verificación en cumplimiento de las leyes.

En ese sentido se estima que, para el caso concreto no se actualizaron los elementos indispensables para justificar la reserva de la información bajo los supuestos antes indicados, ya que en la información solicitada, este Instituto advierte que:

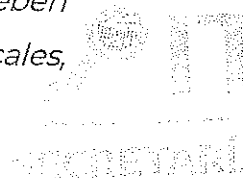
- Dar a conocer la información peticionada no afecta el desarrollo de dicha Auditoría.
- La información a la que desea acceder el recurrente se refiere solamente a *presupuesto otorgado para el ejercicio 2022 para las campañas de esterilización de animales, señalando monto devengado en el último año, concepto que integran los gastos erogados, exhibiendo copia de las facturas expedidas por tales motivos*, lo cual no compromete el desarrollo de la misma y no pondría en peligro las actividades de verificación, inspección y auditoría que realiza la autoridad responsable.
- No obstaculizaría que su difusión llegue a interrumpir en el proceso deliberativo.
- No se advierte que revelar la información de interés de la persona peticionaria pudiera generar un riesgo al proceso de la auditoría, debido a que no existe un impedimento que sea otorgado.

En consecuencia, de los preceptos antes indicados, este Órgano Garante no encontró que en dichas causales existan elementos que determinen que lo solicitado por el recurrente respecto a los datos que contiene la Auditoría, perjudicaría las actividades de verificación, inspección y supervisión, así como las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo que realiza la Auditoría Superior del Estado a la cuenta pública del Sujeto Obligado, respecto a dicho documento, por lo que, la divulgación de la información requerida por el particular no representa un riesgo real,

demostrable e identificable un perjuicio significativo al interés público, respecto de la auditoría; es decir, su difusión no causaría un perjuicio a la “protección del interés jurídico de las partes en la auditoría y del principio de imparcialidad”.

Ahora bien, de la clasificación que hace el sujeto obligado de la reserva de información por causa de encontrarse en verificación de cuenta pública, se cita lo que refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental:

“...Artículo 51.- La información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de esta Ley será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al menos, trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de internet, a más tardar 30 días después del cierre del período que corresponda, en términos de las disposiciones en materia de transparencia que les sean aplicables y, en su caso, de los criterios que emita el consejo. La difusión de la información vía internet no exime los informes que deben presentarse ante el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, según sea el caso...” (Sic)



Por su parte la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, determina que es función del Poder Legislativo:

*“...DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO
Artículo 58.- Son facultades del Congreso:*

...

VI.- Revisar la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas así como la Cuenta Pública de cada uno de los Ayuntamientos de los Municipios del Estado. La revisión de la cuenta pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en la Ley de Ingresos en su caso y en el Presupuesto de Egresos, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Para la revisión de las cuentas públicas, el Congreso cuenta con la Auditoría Superior del Estado, como órgano técnico de fiscalización superior. Tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna,

funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan las leyes.

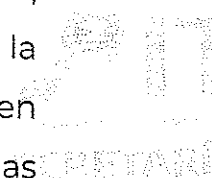
La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberá fiscalizar las acciones del Estado y municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría que emita la Auditoría Superior del Estado tendrán carácter público. La coordinación y evaluación del desempeño de dicho órgano estará a cargo del Congreso, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, de conformidad con lo que establezca la ley; y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización.

Las cuentas públicas del ejercicio fiscal correspondiente deberán ser presentadas al Congreso, a más tardar, el 30 de abril del año siguiente. Únicamente se podrá ampliar el plazo de presentación de la Cuenta Pública del Gobierno de Estado de Tamaulipas, cuando medie solicitud del Gobernador suficientemente justificada a juicio del Congreso, previa comparecencia del titular de la dependencia competente, pero la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la Auditoría Superior de Estado contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del informe de resultados de la revisión de la cuenta pública. El Congreso deberá concluir la revisión de las cuentas públicas a más tardar el 15 de diciembre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe de resultados que emita la Auditoría Superior del Estado, sin demérito de que el trámite de observaciones, recomendaciones o acciones promovidas por la propia Auditoría, seguirá su curso en términos de lo dispuesto por esta Constitución y la ley;..." (Sic)

De lo citado anteriormente, no se desprende una prohibición expresa para que en caso de que los documentos que el particular solicita mediante el folio 280524022000074, se encontraren formando parte de la verificación deliberativa de auditoría, estos pudieran obstruir tal verificación.

Ahora bien, respecto a la **PRUEBA DE DAÑO** que refieren los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, se concreta a:

- Fundar la clasificación, con la fracción que contiene la hipótesis a utilizar de la Ley con lo que refiere el Lineamiento respectivo.
- Motivar (Desarrollo lógico jurídico del artículo que respalda la decisión de considerar la clasificación de la información como reservada, señalando las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que acrediten el vínculo entre la difusión de la información y la afectación al interés público).
- Precisar las razones objetivas, por las que se considera que la apertura de información generaría un riesgo real, demostrable e identificable al interés jurídico de que se trate, en el caso concreto lo sería el señalamiento que hace la responsable respecto a que la información que se solicita en el folio 280524022000074 al entregarse se obstruyen las actividades de verificación y auditoría.
- Realizar una **PONDERACIÓN** entre la medida restrictiva y el derecho de acceso a la información donde el sujeto obligado deberá **JUSTIFICAR** y **PROBAR** objetivamente, con las razones expuestas del porqué considera que la información solicitada generaría un perjuicio que supera el **INTERÉS PÚBLICO** de que la información se difunda.
- Deberá elegir una opción a la excepción al derecho de acceso a la información que menos restrinja y que sea adecuada y proporcional para evitar el perjuicio al interés público.
- Tratándose de las determinaciones de clasificación absoluta de la información, el sujeto obligado debe señalar con claridad y precisión en la **PRUEBA DE DAÑO** los aspectos relevantes de la información clasificada que ayuden a cumplir con el objetivo de brindar certeza al solicitante.



Requisitos anteriores que no solventó el sujeto obligado en su acta de reserva número CT/A-007/OCT-28-2022 de la que se advierte omisiones en:

- Falta de motivación.
- No se actualiza la prueba de daño.
- No realiza la ponderación entre la restricción y el derecho de acceso a la información.
- No le brinda certeza al solicitante mediante el análisis que hace en su prueba de daño.
- No señala circunstancias de modo, tiempo y lugar, que acrediten el vínculo entre la difusión de la información y la afectación al interés público.

En consideración a lo anterior, esta Ponencia considera que le asiste la razón al solicitante cuando afirma que le agravia la clasificación de la información en relación y en suplencia de la queja, tras las respuestas vertidas en alegatos se configura el agravio de la entrega de información incompleta; en ese sentido, resulta un hecho probado que el Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, no atendió lo requerido por el particular, configurándose tal omisión en una negativa ficta para el despacho, atención y desahogo de la solicitud en comento, siendo vulnerado el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública en agravio del promovente, apartándose de los principios que todo sujeto obligado debe seguir de conformidad con lo estipulado en la Ley de Transparencia vigente en el Estado; por lo cual se considera que los agravios esgrimidos por el particular, resulta fundado, por lo que, en virtud de lo anterior, es que este Organismo garante considera pertinente REVOCAR la respuesta del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, en términos del artículo 169, numeral 1, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas.

Ahora bien, no pasa inadvertida para esta Ponencia, la conducta del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, ya que, conforme a lo dispuesto por el artículo 37, numeral 4, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado, los integrantes de éste, tendrán acceso a la información para determinar su clasificación, conforme a la normatividad aplicable.

En el mismo sentido en la Ley que se cita, en su dispositivo 38, fracción IV, se establece que es competencia del Comité confirmar, modificar o revocar las determinaciones respecto a la clasificación de información que realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados.

Concluyendo que, es atribución del Comité de Transparencia tener a la vista y analizar la información que se pretenda clasificar, y estudiarla conforme a la Ley de la materia.

En consecuencia de lo anterior y de lo determinado por éste Organismo Garante, requiérase AL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS, para que se conduzca conforme a los principios que rigen el derecho de acceso a la información y se apegue a lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, BAJO APERCIBIMIENTO de que ante el incumplimiento del presente requerimiento, se puede encuadrar la conducta en lo establecido en el artículo 187, fracción XII de la Ley de Transparencia de la Entidad.

Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutive de este fallo, se requerirá el Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, para que dentro de los diez días hábiles siguientes en que sea notificado de la presente resolución proporcioné al particular, a través de correo electrónico proporcionado en su interposición del medio de defensa, girando copia de ello al correo electrónico de este Instituto secretariaejecutiva.cumplimientos@itait.org.mx toda vez que ha agotado el paso en la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la que actúe en los siguientes términos:

- a. Realice y acredite la búsqueda amplia, razonable y exhaustiva de la información en todas las áreas que pudieran tenerla, y otorgue una respuesta en la que dé contestación concreta a la solicitud de información, en la que se requiere lo siguiente:

Requerimiento 1.- Solicitando se explique pormenorizadamente las etapas procesales en que se encuentra cada expediente, informando a cuantas personas se han sancionado derivado de los mismos.

Requerimiento 2.- El presupuesto otorgado en el presupuesto para el ejercicio 2022 para campañas de esterilización de animales en situación de calle, señalando el monto devengado en el último año, solicitando se expongan pormenorizadamente los conceptos que integran los gastos erogados, exhibiendo copia de las facturas expedidas con dicho motivo.

Requerimiento 4.- Informe a cuánto asciende la recaudación por imposición de multas en materia de protección animal, en las diferentes conductas sancionadas por el marco jurídico de la materia.

Requerimiento 4.- El organigrama de la Unidad Administrativa de Protección Animal, en caso de existir, señalando las funciones que desempeña cada integrante, anexando curriculum vitae. En caso de no funcionar la Unidad Administrativa en referencia, solicito se informe el motivo de esta omisión.

Requerimiento 5.- Informe a cuánto asciende el presupuesto destinado en el Gobierno Municipal de Altamira, para la Unidad Administrativa de Protección Animal.

Requerimiento 6.- Informe del avance del Programa Anual de Protección Animal de la administración en ejecución.

- a. Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que marca la Ley, al Título Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a disposición del particular el resultado de lo anterior.
- b. Dentro de los mismos diez días, se deberá informar a este Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que acrediten la entrega total de la información solicitada.
- c. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del término concedido para tal efecto, este Instituto actuará en términos del Título Noveno, Capítulo II y Título Décimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado.



Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con los elementos necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución.

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción XXXVI y 75, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información que constituya un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, de

quien le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción III; 113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, relativo a la clasificación de la información y entrega de información incompleta resulta fundado, según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se ordena REVOCAR parcialmente la respuesta otorgada en el periodo de alegatos en fecha ocho de diciembre del dos mil veintidós, otorgada por el Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, de conformidad con lo expuesto en el considerando CUARTO del fallo en comento, a fin de que proporcione dentro de los diez días hábiles siguientes en que sea notificado de la presente resolución, al correo electrónico del recurrente, girando copia de ello al correo electrónico de este Instituto secretariaejecutiva.cumplimientos@itait.org.mx toda vez que ha agotado el paso en la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la que actúe en los siguientes términos:

- a) Realice y acredite la búsqueda amplia, razonable y exhaustiva de la información en todas las áreas que pudieran tenerla, y otorgue una respuesta en la que dé

contestación concreta a la solicitud de información, en la que se requiere lo siguiente:

Requerimiento 1.- Solicitando se explique pormenorizadamente las etapas procesales en que se encuentra cada expediente, informando a cuantas personas se han sancionado derivado de los mismos.

Requerimiento 2.- El presupuesto otorgado en el presupuesto para el ejercicio 2022 para campañas de esterilización de animales en situación de calle, señalando el monto devengado en el último año, solicitando se expongan pormenorizadamente los conceptos que integran los gastos erogados, exhibiendo copia de las facturas expedidas con dicho motivo.

Requerimiento 4.- Informe a cuánto asciende la recaudación por imposición de multas en materia de protección animal, en las diferentes conductas sancionadas por el marco jurídico de la materia.

Requerimiento 4.- El organigrama de la Unidad Administrativa de Protección Animal, en caso de existir, señalando las funciones que desempeña cada integrante, anexando curriculum vitae. En caso de no funcionar la Unidad Administrativa en referencia, solicito se informe el motivo de esta omisión.

Requerimiento 5.- Informe a cuánto asciende el presupuesto destinado en el Gobierno Municipal de Altamira, para la Unidad Administrativa de Protección Animal.

Requerimiento 6.- Informe del avance del Programa Anual de Protección Animal de la administración en ejecución.

SECRETARÍA

b. Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que marca la Ley, al Título Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a disposición del particular el resultado de lo anterior.

Con fundamento en los artículos 171, numeral 2, y 179 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, se instruye al sujeto obligado para que en el mismo término informe a este Instituto sobre su cumplimiento, adjuntando a dicho informe los documentos que acrediten la entrega total de la información solicitada.

TERCERO.- Requierase por única ocasión AL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS, para que se conduzca conforme a los principios que rigen el derecho de acceso a la información y se apegue a lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, BAJO APERCIBIMIENTO de que ante el incumplimiento del presente requerimiento, se puede encuadrar la conducta en lo establecido en el artículo 187, fracción XII de la Ley de Transparencia de la Entidad y se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia para que le de vista de la presente resolución.

Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, este Instituto actuará en términos del Título Noveno, Capítulo II y Título Décimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado.

CUARTO.- En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del término concedido para tal efecto, este Instituto actuará en términos del Título Noveno, Capítulo II y Título Décimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, posibilitando así la imposición de medidas de apremio, mismas que pueden consistir en la aplicación de una amonestación

pública hasta una multa, equivalente a ciento cincuenta a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el tiempo en que se cometa la infracción, (que va desde \$15,561.00 (quince mil quinientos sesenta y un pesos 00/100 m.n.), hasta \$207,480.00 (doscientos siete mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m.n.), lo anterior con fundamento en los artículos 33, fracción V, 101,183 y 187, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

QUINTO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva del Instituto de Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento correspondiente al presente fallo.

SEXTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido.

SÉPTIMO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

OCTAVO.- Se instruye a la Secretaria Ejecutiva notificar a las partes, de conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del dos mil dieciséis, dictado por el Pleno de este organismo garante.

Así lo resolvieron por unanimidad, la licenciada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y los licenciados Rosalba Ivette Robinson Terán y Luis Adrián Mendiola Padilla, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, siendo presidente y ponente la primera de los nombrados, asistidos por la

licenciada Suheidy Sánchez Lara, Secretaria Ejecutiva, mediante designación de fecha primero de junio del dos mil veintitrés, en términos del artículo 33, numeral 1, fracción XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas, del Instituto de Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.



Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla
Comisionada Presidente



Lic. Rosalba Ivette Robinson Terán
Comisionada



Lic. Luis Adrián Mendiola Padilla
Comisionado



Lic. Suheidy Sánchez Lara:
Secretaria Ejecutiva

000000

SIM TEXTO

